

Nuestra América XXI

Desafíos y
alternativas

#109

Abril 2026

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

José Luis Rodríguez
Julio C. Gambina
Ana María Aragonés
Gabriela Roffinelhli
John Freddy Gómez
Camila Andrea Galindo
Aníbal García Fernández
Tamara Lajtman
Marcelo A. Maisonnave
Aníbal García Fernández
Lucas Castiglioni

Boletín del
Grupo de Trabajo
**Crisis y economía
mundial**



Nuestra América XXI :

PLATAFORMAS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Pablo Vommaro - Director Ejecutivo

Gloria Amézquita - Directora Académica

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory - Producción Editorial

Valeria Carrizo y Darío García - Biblioteca Virtual

Equipo

Magdalena Rauch - Coordinadora

Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Luna González y Teresa Arteaga

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina.

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Coordinadores del Grupo de Trabajo

Adriana Gabriela Roffinelli Maya

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas

Argentina

gabyroff@gmail.com

Alejandro César López Bolaños

Instituto de Investigaciones Económicas

Universidad Nacional Autónoma de

México

México

alelopezu2@comunidad.unam.mx

Equipo editorial del Grupo de Trabajo

Josefina Morales

Gabriela Roffinelli

Julio Gambina

Aníbal García Fernández

Lucas Castiglioni

Armando Negrete

ÍNDICE

Crisis y economía mundial

- El bloqueo económico de EE.UU. a Cuba: nuevas medidas en el genocidio contra el pueblo cubano, José Luis Rodríguez
- EE. UU. e Israel desatan la guerra sobre Irán y más allá, Julio C. Gambina
- Política antiinmigrante, instrumento para la subordinación hemisférica, Ana María Aragonés

Países y regiones

- Cincuenta años no es nada
- A cincuenta años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina: una multitud enfrentó la ofensiva cultural del gobierno de Javier Milei, Gabriela Roffinelli
- American Curios, David Brooks
- El progresismo colombiano a refrendación en las urnas, John Freddy Gómez y Camila Andrea Galindo

Temas

- Ocho claves geopolíticas para entender la guerra en Irán, Aníbal García Fernández
- Ecuador intervenido: guardián de los intereses de EE.UU. contra Colombia, Tamara Lajtman, Marcelo A. Maisonnave y Aníbal García Fernández

Gráficas y estadística

- El asedio imperialista sobre Cuba, Lucas Castiglioni

**EL BLOQUEO ECONÓMICO DE EE.UU. A CUBA:
NUEVAS MEDIDAS EN EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO CUBANO**

José Luis Rodríguez^{1*}

Envalentonado con la agresión militar del gobierno norteamericano contra Venezuela, que condujo al inédito secuestro de su presidente y su esposa, Donald Trump ha proclamado su deseo de acabar de una vez con la Revolución cubana, luego de suspender los envíos de petróleo a Cuba.

Para ese objetivo decidió, al cierre del mes de enero, aplicar un bloqueo total al suministro de petróleo a Cuba, amenazando, además, a cualquier país que lo intente hacer, con la aplicación de aranceles de castigo, o la incautación de las naves que traten de llegar al país, aplicando la fuerza militar en su contra si fuera preciso.

El pretexto para la implementación de esta medida ha sido la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, aseveración ridícula y totalmente falsa que se suma a la sarta de indecentes mentiras que el presidente norteamericano utiliza para justificar la agresión de aquellos países que osan enfrentarse a los intereses del imperialismo en defensa de su soberanía nacional.

Sin embargo, hay que destacar que esta última decisión significa un cambio sustancial en las medidas del bloqueo económico, que ya cumplieron 64 años de su establecimiento por el presidente Kennedy en 1962, y que han costado 170 677 millones de dólares en pérdidas a la economía nacional.

Se trata aquí de privar al pueblo cubano de los recursos elementales, no ya para su desarrollo, sino también para la existencia vital del pueblo que defiende su país y su derecho a la independencia.

Se trata de evitar que Cuba pueda disponer de electricidad, que no consiga alimentos o medicamentos para que mueran sus habitantes sin remedio. Todo esto envuelto en falsedades que a través de los medios dominantes se proclama

^{1*} Cuba. Integrante CLACSO GT Crisis y economía mundial y del GT Estudios sobre Estados Unidos. Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), La Habana.

hipócritamente, como la necesidad de “salvar” a un llamado “Estado fallido” al que se responsabiliza de todas sus desgracias.

En otras palabras, se trata de un genocidio brutal contra un pequeño país que demuestra el odio incontenible del imperio norteamericano, que evidencia así su desesperación eliminando a la población cubana por su impotencia para derrotar a la Revolución que se inició el 1º de enero de 1959.

Ya en estos momentos, el país cumplió casi 3 meses sin que ingresara el petróleo importado que se requiere, pues la disponibilidad de petróleo y sus derivados hoy también se ve afectada, con una producción nacional de unos 2.5 a 3.0 millones de toneladas anuales, de una necesidad mínima de 6.0 millones.

Los impactos son hoy visibles. Escasean los alimentos, muchas producciones se paralizan por falta de electricidad y transporte. Todo esto conlleva que muchos trabajadores pasen a recibir subsidios ante la pérdida temporal de su empleo.

La falta de medicamentos eleva los índices de mortalidad en las personas enfermas, especialmente de padecimientos graves como son enfermedades del corazón o el cáncer.

En resumen, la población sufre intensamente y de forma directa los resultados de las medidas del norte revuelto y brutal y que recuerdan al fascismo y su odio sin medida contra la humanidad.

Desde luego, hay notables expresiones de solidaridad y apoyo al pueblo cubano en esta difícil coyuntura, como las destacables posiciones del gobierno de México y su presidenta, así como las posiciones de los gobiernos de Colombia y Brasil, y también de China y Rusia; incluso este último país envió un primer cargamento de unos 700 mil barriles de petróleo a Cuba, enfrentando a Estados Unidos abiertamente.

Pero hay que decir que también hoy en América Latina y el Caribe hay gobiernos que rompen relaciones con Cuba, siguiendo el libreto impuesto por Donald Trump, expulsando a las brigadas médicas cubanas como ha ocurrido en los casos de Honduras y Jamaica o cancelando abruptamente y sin justificación las relaciones diplomáticas con Cuba, como en los casos de Ecuador y Costa Rica.

No obstante, no han conseguido aislar a nuestro país del resto del mundo.

En las actuales circunstancias el país no se ha rendido. Incluso ha aceptado dialogar con Estados Unidos en una búsqueda de convivencia respetuosa y cooperación en asuntos de interés común, pero sin concesiones de principio.

El gobierno cubano ha diseñado un conjunto de medidas de ahorro y ajuste para que no se afecten la educación y la salud pública hasta donde sea materialmente posible. Se han realizado ajustes que permiten mantener un mínimo de actividades culturales y deportivas y de transportación y el país en pleno repite lo que hizo en los años 90 -con Fidel Castro al frente- ante la abrupta desaparición de los países socialistas europeos. También se han flexibilizado las políticas económicas externas con el objetivo de estimular la inversión extranjera directa y también se ha iniciado un ajuste en el sistema de dirección de la economía para lograr mejores resultados y discutiendo estos temas masivamente con la población.

Esta es la situación de enfrentamiento de Cuba con Estados Unidos en la actualidad.

Cuba y su pueblo mayoritariamente siguen apoyando su Revolución y saben dónde está el enemigo principal que hoy nos ataca violentamente.

Como dijera Fidel años atrás, seguiremos combatiendo hasta la victoria siempre, tal y como expresó también el Che en su lucha solidaria por la verdadera independencia de América Latina. Si Estados Unidos se empeñara en atacarnos militarmente, diremos como expresó el general Antonio Maceo en su lucha por la independencia durante el siglo XIX, “Quien ose invadir a Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha.”

EE. UU. E ISRAEL DESATAN LA GUERRA SOBRE IRÁN Y MÁS ALLÁ

Julio C. Gambina^{2*}

Crece los argumentos que detrás del poder militar de EE.UU. están los problemas locales y denuncias “Epstein” sobre Trump, tanto como la presión de Israel para involucrar a la primera potencia militar mundial en el ataque a Irán, como parte de una estrategia de dominación en Medio Oriente, precedida por el genocidio del pueblo palestino. Entre otros que argumentan al respecto están las afirmaciones del renunciado Director del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, Joe Kent al destacar que Trump asumió la decisión de atacar sin que el país islámico fuera una amenaza.

El dato real es que el 28 de febrero, el ataque militar de EE.UU. e Israel sobre la República islámica agrava las tensiones económicas y políticas de un mundo capitalista en crisis y en reorganización. Algo ya no funciona como antes y hay que rearmar el mecanismo de la explotación y el saqueo. La/s guerra/s ocupan el lugar de última instancia como iniciativa del poder. Se trata del fenómeno de la guerra y la militarización como evidencia de la esencia de los problemas del régimen de acumulación capitalista.

La crisis se manifiesta en la brutal ofensiva en contra del trabajo a partir de la crisis de rentabilidad de los 60/70, agravada con la política liberalizadora desde los 80 del siglo XX y potenciada luego del 2007/09 y la desaceleración económica, profundizada en tiempos de pandemia desde el 2020. Es una dinámica asociada a la regresiva reforma estatal y a nuevos reagrupamientos globales en la disputa de EE. UU. con China por la hegemonía capitalista.

Por su parte, la reorganización del sistema mundial se expresa en el proyecto MAGA de Trump y su equipo, que trasciende la política local para proyectarse en todo el mundo. El Foro de Davos hizo explícito el desafío al proclamar la necesidad de barajar y dar de nuevo, de resetear el capitalismo.

En efecto, Marco Rubio, Secretario de Estado, llevó en febrero de 2026 a Múnich un mensaje de justificación guerrerista para restablecer la dominación

^{2*} Argentina, miembro del GT de CLACSO “Crisis y economía mundial”. Presidente de la FISyP.

imperialista desde Washington. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rubio reivindicó el papel civilizatorio del capitalismo y la colonización europea en Nuestra América, resaltando el error de convalidación del sistema bipolar desde 1945. La lógica es que el capitalismo es la civilización occidental que mejoró a la humanidad, por lo que se sostiene su defensa de cualquier modo. El problema es cualquier alternativa, que inevitablemente conduciría al comunismo.

La violencia en origen del régimen del capital se reitera en cada nueva etapa de afirmación y extensión de las relaciones capitalistas de producción y circulación. El capitalismo nace chorreando sangre dirá Karl Marx y nunca dejará de hacerlo.

Con esos argumentos del Secretario de Estado se sostiene la lucha contra el comunismo y múltiples variantes que llevan a la humanidad por ese rumbo: el socialismo y las variantes reformistas de base socialdemócrata, e incluso la democracia liberal y las políticas económicas keynesianas, incluso neoclásicas. Se sostiene que el capitalismo llevó inversiones para fortalecer al comunismo, en clara alusión a China y su poder construido en las últimas cuatro décadas. Un crecimiento asociado a las inversiones de capitales transnacionales que buscaban fuerza de trabajo más barata que en el capitalismo desarrollado, una forma de contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancias.

La apuesta de Trump es la reorganización del sistema mundial para afirmar el papel hegemónico de EE. UU. y en ese sentido, el Estado de Israel y la gestión Netanyahu constituyen su principal aliada en Medio Oriente, territorio de concentración del insumo estratégico que motoriza las confrontaciones militares, económicas y políticas especialmente desde la crisis energética estadounidense de los setenta del siglo pasado. La operación sobre Venezuela tiene el mismo sello.

Petróleo, dólar y orden mundial

En rigor, no solo se trata del petróleo, sino de su comercialización bajo el dólar, los petrodólares, a partir del acuerdo de EE. UU. con Arabia Saudita para que la comercialización petrolera se materialice con la moneda estadounidense. Ese acuerdo funcionó por medio siglo hasta junio del 2024, habilitando el comercio petrolero en otras monedas, debilitando el peso del dólar.

Todos los intentos previos por eliminar ese condicionante generaron conflictos graves en Irak, Libia e incluso Venezuela. En este país, no es tanto la apropiación de

petróleo actual, sino de asegurar el mantenimiento de la producción petrolera en la esfera del dólar.

Con el ataque sobre Irán se produjo un fuerte crecimiento del precio del petróleo y una importante valorización de la divisa estadounidense. El fantasma inflacionario se extiende deteriorando las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas. La inflación es un mecanismo regresivo en la distribución del ingreso, consolidando la desigualdad.

El petróleo subió un 40% aproximadamente, de más de 60 dólares el barril antes del ataque a Irán a más de 100 dólares y con picos de 120 dólares, sin estimación de su evolución futura según sea la duración del conflicto. El cierre del estrecho de Ormuz contribuye a la incertidumbre, agravada con la respuesta de las aseguradoras que encarecen el costo de transporte.

Ante la incertidumbre se produce el “vuelo hacia la calidad” de los capitales excedentes y por eso la valorización del dólar, aun cuando no recupera las pérdidas acontecidas en el último año. Esta revalorización del dólar dificulta la demanda de Trump por bajar las tasas de interés en EE. UU. y en definitiva interviene en los límites para superar la desaceleración económica de arrastre en la potencia hegemónica.

La gestión Trump pretende recomponer el papel de EE.UU. en el sistema capitalista mundial y para ello necesita sostener el peso de su divisa en las relaciones económicas internacionales. De ahí su política de sanciones y guerra arancelaria, más allá del fallo adverso de la Corte Suprema, ya que con esos aranceles avanzó en acuerdo de inversiones, especialmente de países del Medio Oriente en EE.UU.

Trump alardea con un compromiso por 18 billones de dólares, destaca Paul Krugman, cuando en realidad sólo son verificables una tercera parte. La columna del nobel de economía del 2008 se publicó el 18 de marzo pasado bajo el título “Donald Trump, Petropresidente”, en donde analiza los impactos económicos de la agresión a Irán, pero especialmente los lazos de corrupción y enriquecimiento entre el jefe de Estado de EE.UU. y las monarquías de Oriente Medio.

El orden mundial se reorganizó al final de la segunda guerra bajo la bipolaridad entre capitalismo y socialismo, más allá de cualquier opinión sobre el tipo de sociedad en construcción en el este de Europa y en cualquier territorio en donde avanzará una propuesta de revolución contra el capitalismo y por el socialismo.

La desarticulación de la URSS y el socialismo en el este de Europa supuso una reorganización del sistema mundial. La lógica cultural estaba abonada por el “fin de la historia” y un relanzamiento del imaginario social mayoritario a favor del mercado, generando condiciones de posibilidad para la expansión de la corriente hegemónica liberalizadora asentadas en la escuela austríaca de economía y en la de Chicago.

Mises, Hayek y Friedman pasaron a hegemonizar el pensamiento y con ello se consolidó la ofensiva capitalista desde la política económica y habilitó el rápido ascenso de las ultraderechas en variados gobiernos, especialmente desde el arribo a la Casa Blanca del magnate inmobiliario en 2016 y ahora con mayor iniciativa y poder desde 2025.

Pensar la alternativa

Un gran desafío para la emancipación social supone este presente de guerra y amenaza de escalada bélica nuclear, que se suma a la destrucción sistemática del medio ambiente.

En tiempos de fuerte innovación científica y tecnológica, se afirma la constante de **progreso y devastación** que devuelve la historia del orden capitalista.

La respuesta en origen fue la resistencia de los pueblos colonizados y la construcción de sujetos en lucha que instalaron su sello en revoluciones que significaron y aún significan experiencias de cambio social y político.

No solo es necesario hacer balance de dichas experiencias, sino de motorizar nuevas síntesis teóricas de la variedad inmensa de luchas populares en todo el planeta y generar condiciones de posibilidad para nuevas síntesis de praxis política que abran camino a una perspectiva revolucionaria en contra del capitalismo y más allá.

Es larga la historia de la civilización y en ella, la del capitalismo, que continúa el proceso de expansión de las relaciones monetario-mercantiles, de explotación y saqueo. La crítica al régimen del capital sigue siendo un imperativo para sistematizar alternativas civilizatorias en defensa de la vida social y natural.

POLÍTICA ANTIINMIGRANTE INSTRUMENTO PARA LA SUBORDINACIÓN HEMISFÉRICA

Ana María Aragonés^{3*}

La política antiinmigrante llevada a cabo por el norte global y, particularmente por Estados Unidos, se inscribe en una justificación discursiva de amenaza a la soberanía nacional y a la civilización occidental. Quedaron claras estas ideas con la intervención de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad realizada del 13 a 15 de febrero en Múnich al plantear que la migración masiva constituye una crisis que estaría “desestabilizando a las sociedades occidentales” y representa un peligro a la cohesión social y cultural de Occidente. Por ello reclama el control de fronteras para proteger la herencia común como actos fundamentales. Marco Rubio vincula migración con nociones de defensa civilizatoria y lo convierte en un paradigma para las élites políticas del Norte Global quienes reproducen los mismos conceptos que sustentan la exclusión migratoria. Este enfoque busca globalizar la lógica que caracteriza la política migratoria bajo el gobierno de Donald Trump basada en securitización, protección de fronteras, primacía del interés nacional, y proyectarla hacia sus aliados estratégicos europeos a los que insta a “revitalizar la alianza transatlántica” sobre la base de valores e historia compartidos, aunque Marco Rubio dejó claro que los términos serían definidos por Estados Unidos, especialmente en ámbitos como migración, seguridad y cultura.

En este sentido, **las políticas antiinmigrantes puestas en marcha por la administración de Donald Trump, tanto en su primer periodo ((2017-2021) como en el segundo iniciado el 20 de enero de 2025, se enmarcan en la criminalización de personas y van dirigidas hacia personas racializadas provenientes del sur global.** El arma disuasoria y punitiva utilizada es la tristemente célebre agrupación ICE (Immigration and Customs Enforcement) dispuesta a cometer las más oprobiosas e ilegales detenciones con absoluta impunidad, hasta el extremo de asesinar a dos ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Minnessota, Renee Good y Alex Pretti, quienes defendían solidariamente a los migrantes. Sin embargo, **es importante destacar las movilizaciones sociales internas que la cruel política antiinmigrante**

^{3*} Profesora-investigadora, Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) UNAM.

ha concitado en Estados Unidos. Entre ellas, la reacción de organizaciones de migrantes, gobiernos locales, iglesias y movimientos antirracistas, así como agrupaciones de derechos civiles como *United we Dream*, *American Civil Liberties Union* (ACLU) que cuestionan la legitimidad del control migratorio. Si las políticas restrictivas pretendían ser un mecanismo de disuasión, la movilización interna generó redes de solidaridad que trataron de mitigar, aunque sea parcialmente los gravísimos efectos de la estrategia de criminalización, lo que de hecho debilitó el objetivo sancionador y puso en evidencia no sólo la dimensión racializada del control migratorio sino la violencia policial. Las críticas también se desplazaron hacia las propias instituciones gubernamentales, como se deduce con la consigna de “Fuera ICE” que portan muchas personas, al punto que Kristi Noem, la Secretaria de Seguridad Nacional, fue despedida.

En este contexto **darle bríos a la Doctrina Monroe, rebautizada Doctrina Donroe, resulta estratégico para Donald Trump quien plantea que América Latina y el Caribe, a los que considera su patio trasero y área principal y valiosa, y que enfrenta problemas de migración, narcotráfico y sobre todo las potencias globales como China y Rusia que afectan directamente a la seguridad de Estados Unidos.** Por lo tanto, se plantea exigir a los gobiernos que rompan cualquier lazo con esas potencias y para ello aplicará todo el control necesario en la región que le permita enfrentar las amenazas percibidas, incluso con despliegues militares, fuerzas navales y operaciones de seguridad ampliadas. Pero también presionará a gobiernos considerados progresistas como México, Brasil y Colombia coaccionándolos, buscando su alineación a las prioridades estadounidense porque considera a la región “su hemisferio”. Proyecto injerencista y militarista que ha quedado consolidado con la convocatoria del día 7-8 de marzo en Miami a la que fueron invitados por Donald Trump 12 países latinoamericanos aliados y seguidores de sus políticas, no México, Brasil ni Colombia.

El objetivo es formar una coalición militar llamada Escudo de las Américas con el fin de “terminar con los narcotraficantes, y el problema migratorio”. Sin embargo, la estructura de mando, los recursos militares y la inteligencia permanecen en manos de Estados Unidos, lo que refuerza su capacidad de intervención. Una coalición que reproduce una lógica histórica de subordinación regional y una estrategia más para detener su declive hegemónico intentando frenar la actividad de potencias como China.

De esta forma Estados Unidos hace evidente, tal como señala Schultz,⁴ que **América Latina y el Caribe no son parte de “Occidente” en términos geopolíticos sino que son “su hemisferio occidental”, en términos geográficos, es decir, su patio trasero, cuyo efecto es negar su pertenencia al sur global para pretender desactivar su potencial articulación con Asia y África, porque se trata de una batalla “política por la identidad geopolítica de la región”.**

A pesar del embate de este imperialismo perverso y agresivo, en el contexto internacional se está formando un mundo multipolar en el sur global, nuevos polos de poder económico, político y militar. Entre ellos destacan los BRICS+, que se perfilan como un bloque económico-financiero alternativo, con propuestas como monedas locales en comercio, bancos de desarrollo y cooperación Sur-Sur. Por otro lado, la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) se plantea como un bloque para la cooperación regional, relevante en temas de energía, seguridad, transporte intercontinental. La nueva Alianza del Sahel (Níger, Burkina Faso y Mali) en busca de autonomía a partir de la ruptura con el neocolonialismo francés; la fortaleza de la CELAC y los intentos por recuperar UNASUR en América Latina.

En última instancia, la Doctrina Monroe, la política antiinmigrante, el “Escudo de las Américas” refleja una tensión histórica en la política latinoamericana entre la subordinación hemisférica y la autonomía regional, Mientras la lógica de seguridad promovida por Estados Unidos privilegia la militarización y el control territorial, una estrategia emancipadora para América Latina requeriría fortalecer mecanismos de integración regional, diversificar las alianzas internacionales y promover una agenda de seguridad centrada en el desarrollo social, la reducción de la desigualdad y la soberanía política de los Estados latinoamericanos. **América Latina requiere fortalecer mecanismos de integración regional, diversificar las alianzas internacionales y promover una agenda de seguridad centrada en el desarrollo social, la reducción de la desigualdad y la soberanía política de los Estados latinoamericanos.**

⁴ . Sebastián Schulz. *Nuestro Hemisferio*. Other News.

A cincuenta años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina: una multitud enfrentó la ofensiva cultural del gobierno de Javier Milei

Gabriela Roffinelli^{5*}

El 24 de marzo se cumplieron cincuenta años del inicio de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El autodenominado *Proceso de Reorganización Nacional* implementó un plan sistemático de terror que incluyó: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, el funcionamiento de cerca de 700 centros clandestinos de detención y tortura, la apropiación de más de 500 niños y niñas, la persecución de trabajadores, intelectuales, militantes políticos y sindicales y un exilio masivo.

El golpe de Estado contó con la participación activa de sectores del empresariado local y multinacional, de amplias franjas de la jerarquía eclesiástica, de medios de comunicación que silenciaron o justificaron los crímenes —instalando fórmulas como el “por algo será”— de partidos políticos, así como del imperialismo estadounidense en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Se trató de un golpe dirigido contra el movimiento obrero, las organizaciones populares y toda forma de resistencia social y política, que produjo una reestructuración profunda del patrón de acumulación vigente en la etapa previa (1930-1976), centrado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

En términos económicos, la dictadura cívico-militar instauró un patrón de acumulación que reconfiguró estructuralmente la economía argentina, consolidando un proceso de valorización financiera en detrimento del sector productivo. La liberalización del sistema financiero, la apertura comercial indiscriminada y el endeudamiento externo acelerado promovieron la desindustrialización, el cierre de empresas y el debilitamiento del tejido productivo nacional. Asimismo, la política de altas tasas de interés y la centralidad del capital especulativo incentivaron la extranjerización de la economía, la fuga de capitales y la concentración económica, al tiempo que profundizaron la dependencia respecto del financiamiento externo. Como resultado, se produjo un incremento sustantivo de la deuda externa, una regresiva redistribución del ingreso en

^{5*} Argentina. Co-coordinadora del Grupo de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial.

perjuicio de los sectores trabajadores y una creciente vulnerabilidad estructural que condicionan las dinámicas económicas del país en las décadas posteriores.

En su discurso de despedida, en 1981, el ministro de economía Martínez de Hoz sostuvo que su gestión había sentado las bases para un redimensionamiento del Estado a partir de cinco ejes: la reducción del déficit fiscal, la racionalización del gasto público, la promoción de privatizaciones de empresas estatales, el reordenamiento de la inversión pública y la reforma del sistema impositivo.

La alianza social que sostuvo a la dictadura perseguía el objetivo político-estratégico de asestar, mediante la reestructuración del patrón de acumulación, un golpe decisivo contra el ascenso de las luchas revolucionarias en el país. En este sentido, la dictadura no solo reorganizó las estructuras económicas, sino también las relaciones sociales y los dispositivos de poder. Las consecuencias de ese reordenamiento violento se proyectan, bajo diversas formas, hasta el presente.

La batalla cultural por la resignificación del pasado reciente

En la actualidad, el gobierno de Javier Milei impulsa un programa económico que no constituye una novedad en la historia argentina. Sus lineamientos centrales remiten al repertorio neoliberal inaugurado por la dictadura militar y profundizado en coyunturas posteriores: en el ciclo de reformas estructurales implementado por Carlos Menem y Domingo Cavallo en la década de 1990 y en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Entre sus principales componentes se destacan el ajuste fiscal, la liberalización de precios, la apertura comercial, la desregulación financiera, el endeudamiento externo, la reducción del rol del Estado en materia social y el fortalecimiento en el represivo; y la promoción de la inversión extranjera directa, particularmente, en sectores mineros, hidrocarburíferos y financieros.

La afinidad con el programa de la dictadura no es únicamente estructural, sino también explícitamente reivindicada. El propio Milei ha elogiado la gestión del ministro de la dictadura, presentándola como un antecedente legítimo de las reformas que su gobierno pretende profundizar. Esta reivindicación no resulta neutral: implica, simultáneamente,

una operación de legitimación retrospectiva del terrorismo de Estado como condición de posibilidad de dicho programa económico.

En este marco, el gobierno no solo ha recortado el financiamiento de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), sino que también ha desarticulado políticas públicas vinculadas a la memoria y ha asumido activamente una estrategia de rehabilitación simbólica de la dictadura cívico-militar. En esa dirección, ha relativizado la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos e intentado instalar la idea de que las muertes causadas por las organizaciones armadas en la década del setenta deben ser consideradas, de igual modo, “crímenes de lesa humanidad”.

De este modo, se reactualiza la narrativa justificatoria elaborada por la propia dictadura, según la cual habría existido una “guerra” caracterizada por excesos de ambas partes. Esta perspectiva establece una equivalencia moral entre la violencia estatal y la ejercida por organizaciones populares, diluyendo la responsabilidad específica del Estado y desplazando el análisis hacia una lógica de confrontación entre actores supuestamente equivalentes. Lejos de constituir una revisión historiográfica rigurosa, esta operación discursiva se inscribe en una estrategia orientada a relativizar el terrorismo de Estado, erosionar los consensos construidos en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia, y deslegitimar las luchas históricas de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El gobierno de Milei configuró la conmemoración del 24 de marzo como un campo central de disputa simbólica. En ese contexto, difundió un video de más de una hora en el que promovía una denominada “memoria completa”, sustentada en testimonios que contribuyen a reforzar una equivalencia entre víctimas y victimarios.

La multitud en las calles

La respuesta social se expresó en una movilización masiva, transversal e intergeneracional, que desbordó todas las previsiones. Este 24 de marzo multitudes se concentraron en las calles y plazas de las ciudades de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos feministas, partidos políticos de la oposición y amplios contingentes de ciudadanos y ciudadanas sin adscripción orgánica confluyeron en la histórica Plaza de Mayo. La consigna central de la jornada fue: “A 50

años del golpe genocida: el mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. ¡Que digan dónde están!". Días antes, el Equipo Argentino de Antropología Forense había logrado identificar los restos de doce personas hallados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

En este contexto, la apuesta gubernamental por la confrontación en el plano de la "batalla cultural" no produjo la fragmentación social que esperada. Por el contrario, encontró una sociedad capaz de movilizarse masivamente cuando percibe que se pretende imponer una relectura del terrorismo de Estado funcional a la impunidad.

Las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han llevado a un deterioro significativo de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. El ajuste fiscal, la reducción del gasto público y la desregulación de precios han contribuido a una aceleración inflacionaria en rubros sensibles, una caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y un aumento de los niveles de pobreza e indigencia. Asimismo, el debilitamiento de políticas sociales, educativas y sanitarias ha profundizado las desigualdades preexistentes, afectando de manera particular a los sectores más vulnerables. En este contexto, se observa también una mayor precarización laboral, el crecimiento de la informalidad y una retracción del Estado para garantizar derechos básicos, configurando un escenario de creciente fragmentación social y conflictividad.

A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la memoria no constituye una operación nostálgica ni un ritual vacío, sino un componente central de la disputa política contemporánea. La interpretación de lo ocurrido entre 1976 y 1983 resulta inseparable de la discusión sobre el modelo de sociedad que se encuentra en juego en la Argentina actual.

Fue el día de protesta nacional más grande de la historia de Estados Unidos, según los organizadores de la movilización No a los Reyes, con más de 3 mil 300 acciones de protesta en todas las esquinas del país. Se exhibió la rabia frente a la agenda derechista encabezada por el ocupante de la Casa Blanca, pero también la alegría de salir, gritar, bailar y cantar juntos.

La estrella del día fue la gente, aunque también estaban *El Jefe* Springsteen y Robert De Niro, así como las legendarias Jane Fonda y Joan Báz y figuras políticas. Pero las noticias no fueron ellos, sino la expresión masiva de repudio y furia ante los asaltos contra comunidades inmigrantes, a libertades y derechos civiles, el medio ambiente y ante guerras.

Pero después de un día de actos masivos y chiquitos en grandes urbes y pueblitos en todos los 50 estados, el ocupante de la Casa Blanca y su alianza derechista continuaron en el poder ignorando –y hasta burlándose– del gran llamado en las calles el sábado por un cambio de régimen en Estados Unidos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué sigue?

Algunos organizadores hablan de mayores acciones de desobediencia civil, ensayos para una huelga general el primero de mayo, ampliar la resistencia constante y aprender las lecciones del gran ejemplo de Minneapolis, cuya continua oposición al asalto de la ciudad por miles de agentes federales anti migrantes logró la primera derrota de la Casa Blanca en el campo de la batalla social. Otros plantean que por ahora el objetivo central es organizarse para las elecciones intermedias de noviembre y lograr que los demócratas retomen el control por mayoría de por lo menos una de las dos Cámaras del Congreso, aunque algunos bromean –o no tanto– que aún está por verse si habrá comicios. Otros ofrecen conferencias, foros, talleres y más para organizar a escala local, estatal y federal en torno a temas como inmigración, defensa del derecho al voto, cómo elevar la oposición a las guerras y expresar solidaridad con otros pueblos.

Si, como dicen los organizadores de No Kings, salieron más de 8 millones a las calles, superando las dos jornadas de protestas del año pasado y con ello lograr

^{6*} Publicado en *La Jornada*, 30 de marzo de 2026. Cd. de México.

⁷ Periodista estadounidense.

algo sin precedente, muchos se atreven a sugerir que está naciendo un movimiento de resistencia capaz de promover un cambio real en este país en varios rubros. Esa expresión de oposición coincide con el desplome de las tasas de aprobación de este presidente en los sondeos (36 por ciento Reuters/Ipsos), donde incluso su manejo de algunos de los temas claves de su campaña –migración y economía– son reprobados por amplias mayorías. Vale recordar en este contexto que ganó su retorno a la Casa Blanca con sólo un tercio del electorado total, una minoría del pueblo estadounidense.

El senador socialista demócrata Bernie Sanders, tal vez el político nacional más popular del país, capturó la coyuntura en su discurso ante el mitin de No Kings en Minneapolis: “estamos viviendo en un momento sin precedente y más peligroso en la historia estadounidense”, advirtió. Pero expresó que el momento no se trata de un solo hombre en el poder, sino “sobre unas cuantas de las personas más ricas del mundo quienes, en su avaricia insaciable, han tomado nuestra economía...Nuestro sistema político... Nuestros medios... Nunca antes en la historia estadounidense unos pocos han tenido tanta riqueza y poder... con el uno por ciento más rico con más riqueza que el 93 por ciento de abajo”. Agregó que además de luchar contra el autoritarismo y los oligarcas, se tiene que frenar el “militarismo fuera de control tanto en casa... como en el extranjero”. Las movilizaciones del sábado no marcan “el fin de nuestra lucha”. Es sólo el inicio”.

O sea, se podría decir que lo que sigue es la lucha por la redemocratización de Estados Unidos. Para eso, tendrán que invitar también a los inmigrantes que saben de estas batallas en sus países y que siempre han estado en las trincheras de ese tema en Estados Unidos (no por nada fueron el primer blanco de la derecha).⁸

⁸ Consultar a Gogol Bordello. Gogol Bordello. Inmigranadia.

<https://www.youtube.com/watch?v=aKpgb2WrGo0>

K'naan, Residente, etc. Immigrants. https://www.youtube.com/watch?v=6_35a7sn6ds

EL PROGRESISMO COLOMBIANO A REFRENDACIÓN EN LAS URNAS

John Freddy Gómez y Camila Andrea Galindo^{9*}

En Colombia para el año 2026 el gobierno progresista del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro espera vivir su refrendación directa a nivel local y nacional tras la administración gubernamental para el periodo 2022-2026. El actual proceso electoral se vive con gran incertidumbre ante la posibilidad o no de una continuidad del proyecto progresista representado por parte de la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcue, quienes cristalizan las experiencias y sentires de las organizaciones sociales y políticas alrededor del Pacto Histórico.

La primera gran refrendación se llevó a cabo el pasado 8 de marzo de 2026 donde se eligió al Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes, en donde se disputaron 103 curules para Senadores y 183 Representantes a la Cámara. Estas curules fueron reducidas en cinco escaños tanto en Cámara y Senado debido a la culminación del plazo temporal de las curules transitorias pactadas en el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) para consolidar su reincorporación por medio de la designación al partido derivado del acuerdo, el Partido Comunes (Senado de la República de Colombia, 2026).

El desarrollo del Pacto Histórico entre las elecciones legislativas del 2022-2026 y las del 2026-2030, pasó de 20 curules en 2022 a rondar para 2026 las 25 y 26 curules tras el avance del escrutinio y para el caso de la Cámara de Representantes pasó de 29 a 42 curules (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2026). Lo anterior evidencia el avance de este partido y su afianzamiento en el espectro político electoral en el país, sin desmedro que ante las elecciones para el periodo 2026-2030 las fuerzas del progresismo no cuentan con las mayorías necesarias para posibilitar las transformaciones exigidas por el pueblo colombiano.

Más aún, se podría evidenciar que la finalización del plazo temporal de las cinco curules tanto en Senado como en Cámara para el partido Comunes es una reducción directa de la fuerza y maniobra en la disputa por desatar el nudo gordiano de la captura

^{9*} Colombia. Integrantes del GT de CLACSO Crisis y economía mundial.

del Estado por las elites neoliberales. Así mismo, se observa que la imposibilidad de la materialización y continuidad del Partido Comunes en el Congreso de la República evidencia las políticas gubernamentales y de Estado que han imposibilitado la incorporación y reconocimiento de la otredad en la sociedad colombiana.

Por otro lado, se constata uno de los problemas estructurales del progresismo en gran parte de los proyectos políticos en Nuestra América y es la baja continuidad en los cargos de elección popular como el poder legislativo, y demás instituciones a nivel nacional y descentralizado, exceptuando las presidenciales. Esta carencia de continuidad se debe en parte a la reducida construcción de cuadros políticos que deben transitar desde la reivindicación hacia la construcción de propuestas, veeduría y auditoria de las practicas, normas y dinámicas procesuales al interior de las instituciones sin dejar de lado el papel organizativo.

En este escenario **la elección de la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcue se configura como una necesidad básica para reconocer las dificultades y avanzar sobre un proyecto progresista que se plantee las transformaciones de forma y fondo que amerita tanto el contexto nacional como el internacional. Las elecciones del Congreso de la República evidencian las reticencias a la transformación de la política electoral**, anudado a las graves irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Servicio Civil y en su completitud el sistema electoral del país con sus relaciones público-privadas.

Las irregularidades del sistema electoral tanto por su relación privada en el sistema electoral dominado por cacicazgos políticos de los partidos y familias tradicionales en Colombia, como por la clara intervención en los diferentes medios para perjudicar al proyecto del Pacto Histórico, limitaron profundamente el avance en el poder legislativo y ejecutivo. Particularmente, para el caso del poder ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral intervino al negar la inclusión a la consulta de la centro izquierda del candidato Iván Cepeda, con el fin de invisibilizar una posible alta votación en calendarios electorales, mientras que la gran parte de las candidaturas del espectro de derecha se midieron, lo que implicó a la postre un hecho mediático.

La disputa electoral para el 2026-2030 se ha convertido tanto en la esperanza por consolidar y radicalizar el proyecto progresista por parte de las fuerzas de izquierda, como, para el caso de las fuerzas de centro y derecha, en retomar la chequera del Estado que ha financiado sus condiciones de privilegio y

exclusión. Las candidaturas de Abelardo de la Espriella y la de Paloma Valencia, representantes de la extrema derecha en Colombia, materializan el interés por retomar el control del poder ejecutivo y con ello desconocer y suprimir los avances democratizadores en Colombia.

El candidato Abelardo de la Espriella representa a las nuevas derechas mediáticas y beligerantes en las que su pretendido triunfo económico individual sobre su discutible proceder ético y social deslumbra a una parte de la sociedad influenciada por el conductismo del neoinstitucionalismo neoliberal. Por otro lado, la elección de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe investigado por nexos con el paramilitarismo y manipulación de testigos (entre otros crímenes), materializa las relaciones conservadoras de la sociedad colombiana en la que el abolengo y las estructuras elitistas, familiares, clientelares, de clase y corporativas pretenden recuperar la completitud del Estado y perpetuar su saqueo de los recursos públicos (CNN, 2022).

Aunque es importante la caracterización de las fuerzas retardatarias que se enfrentan en la gesta política para el 2026, es necesario que no solo se materialice el proyecto político progresista a partir de la comparación y su distanciamiento natural entre las dos fuerzas políticas; sino que es pertinente evidenciar la experiencia del primer gobierno progresista en Colombia, poniendo de presente: i) sus dificultades ante la baja comprensión de las normas, prácticas y procesos al interior del Estado; ii) las reticencias en el avance de las reformas en los diferentes espacios de poder; y, iii) la ingenuidad de la búsqueda de un acuerdo nacional con las elites antes mencionadas.

Así mismo, **es necesario observar los avances en la materialización de los derechos del pueblo colombiano en los que se puede encontrar un lazo indeleble en la participación ciudadana por medio de la comprensión e interiorización de su papel histórico ante la gran tarea de transformar la institucionalidad neoliberal y transitar hacia la construcción de un nuevo sistema socioeconómico.**

El primer gobierno progresista manifestó los límites al interior de las instituciones, evidenció la ingenuidad en la comprensión del poder, reveló la debilidad del partido político y sus tareas históricas, constató la carencia del diálogo entre iguales, atestiguó los radicalismos posmodernos; y, demostró la comprensión de la necesidad de articular una lucha internacional que consolide una disputa por el orden global.

Los límites expresados en el primer gobierno con las instituciones estatales capturadas, los medios de comunicación masivos en poder de las grandes elites, la reticencia de la administración pública y de las fuerzas armadas en el proceso de transición, deben concatenarse con las reformas estructurales necesarias para construir un modelo de desarrollo nacional soberano. La necesidad de franquear los límites burocráticos, las autonomías doblegadas al sistema financiero, la mirada meritocrática como barrera de transformación, la austeridad fiscal de un Estado empobrecido, entre otros relatos del neoliberalismo se configuran como un segundo momento de disputa.

Desafiar las estructuras internas como defender la soberanía del pueblo colombiano y nuestro americano ante el avance de las extremas derechas y del imperialismo desde Estados Unidos se materializan como una bandera de las fuerzas progresistas y de izquierda en nuestra región. Banderas como la defensa de la autonomía y dignidad de los pueblos y sus cuerpos gubernamentales en toda Nuestra América, en particular Cuba y Venezuela, se configura como un inaplazable a favor de la integración continental y en contra de la política de destino manifiesto y de la Doctrina Monroe que nos pretenden devolver al siglo XIX.

Bibliografía:

CNN. (24 de mayo de 2022). Los expedientes de Álvaro Uribe Vélez: 4 casos que enredan al expresidente. Obtenido de CNN:

<https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/24/casos-alvaro-uribe-velez-casos-corte-suprema-acusaciones-testigos-procesos-orix>

Registraduría Nacional del Estado Civil. (28 de marzo de 2026). Resultados Electorales - 2022-2026. Obtenido de Registraduría Nacional del Estado Civil:

<https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/congreso-de-la-republica/>

Senado de la República de Colombia (20 de febrero de 2026). Senado de la República de Colombia. Obtenido de Ojo al dato: ¿cuántos senadores y representantes se eligen este 8 de marzo?: <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7175-ojo-al-dato-cuantos-senadores-y-representantes-se-eligen-este-8-de-marzo>

OCHO CLAVES GEOPOLÍTICAS PARA ENTENDER LA GUERRA EN IRÁN

Aníbal García Fernández^{10*}

Halford MacKinder a inicios del siglo XX definió como pivote geográfico de la historia a Eurasia. Quien controle esta zona, controla el mundo es la frase que ha acompañado análisis geoeconómicos y geopolíticos. Por su parte Nicholas Spykman postuló que son las regiones periféricas o bordes más cruciales para el dominio mundial. Quien controle el denominado *rimland*, controla Eurasia y por lo tanto el mundo.

A continuación, propongo una serie de elementos que podrían contribuir a entender por qué Estados Unidos (EE.UU.) en la segunda década del siglo XXI pretende controlar la periferia de una gran región que es Eurasia. Sin embargo, Irán ha demostrado consistencia estratégica demostrando que el poder de EE.UU. tiene varios límites.

1.- Posición estratégica de Irán

El estrecho de Ormuz es quizá lo más visible cuando se analiza en términos geopolíticos a Irán, país que además posee la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo y es el tercer productor de gas seco, sólo por debajo de Estados Unidos y Rusia. El estrecho de Ormuz en sí mismo es relevante pues por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Cualquier cierre de éste, tiene implicaciones mundiales, desde el incremento de los precios del petróleo y del gas, hasta una serie de incremento de precios en varias mercancías si es que su cierre se mantiene en el tiempo.

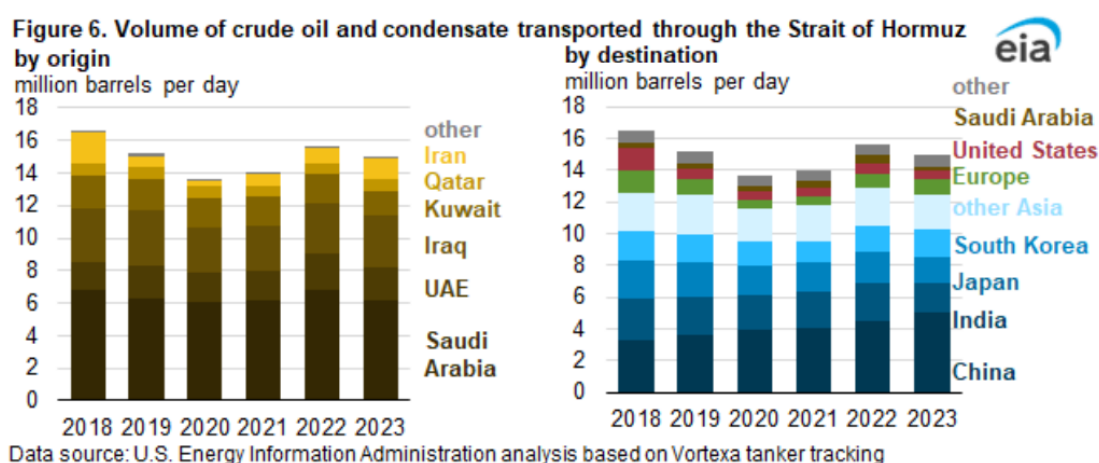
Sin embargo, no afecta de inicio a todos los países por igual. Los principales afectados son países de Asia Occidental que son relevantes por su producción petrolera a nivel internacional, entre ellos Arabia Saudita y Qatar. Ambos países, principales productores de petróleo y Qatar, uno de los principales países con reservas de gas. Además, afecta también a los países productores miembros de la OPEP que, de hecho,

^{10*} México. Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Es investigador del Observatorio Lawfare y docente en la UNAM.

ya comenzaron recortes de petróleo para no saturar sus instalaciones con petróleo, entre esas instalaciones, las refinerías.

Por otra parte, están los consumidores. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), los países que más envían petróleo por el estrecho de Ormuz son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar y en último lugar Irán. Como se muestra en la siguiente gráfica, los principales destinos del petróleo que sale por Ormuz son China, India, Japón, Corea del Sur y, en menor medida, países europeos y Estados Unidos.

Podemos establecer entonces que el cierre del estrecho de Ormuz afectará a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos como productores y a China, India y Japón como consumidores. De estos países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, China e Irán son miembros de los BRICS+.



2.-Vínculos de Irán con China, Rusia y los BRICS

En los últimos años, China amplió su esfera de influencia hacia Asia Occidental con la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y con la expansión de los BRICS que agregó a Irán, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Argentina también se iba a unir, pero con la llegada de Javier Milei, quedó fuera del esquema de integración.

Los BRICS hacen frente al G7 en el que se encuentran países como EEUU, Japón, Francia, Alemania, Canadá, Gran Bretaña e Italia. **Los BRICS+ poseen, ni más ni menos, que el 42% de la población mundial y el 25% del PIB mundial, el 16% del comercio mundial y cerca del 20% de la inversión mundial en 2023.**

Los BRICS+ son una potencia energética y mineral. Sus miembros poseen casi el 100% de la producción mundial de galio, el 70% de las tierras raras, grafito

e hierro. Poseen entre un 50% y 70% de plomo, acero, aluminio y bauxita. Menos del 50% de cobalto, manganeso, níquel, cobre, litio, oro y zinc (García Fernández, 2024).

Los BRICS+ poseen, además, cerca del 40% de la producción mundial de petróleo, poco más del 23% de las reservas de petróleo; el 20% de la producción de gas y casi el 50% de las reservas mundiales de gas, según datos del *BP Statistical Review of World Energy* con datos a 2022.¹¹

En 2025 Irán fue agredido por Israel en lo que se denominó la guerra de los 12 días. En aquella ocasión se demostró el poder de fuego iraní, que cuenta con tecnología militar importante que logró romper la famosa cúpula de hierro israelí, que es abastecida también por equipamiento militar estadounidense. En este ataque de 2026 que comenzó el 28 de febrero, Irán de nuevo mostró su poder de fuego y cambió la estrategia.

En 2025 Irán no atacó posiciones militares de Estados Unidos, ahora ataca bases militares estadounidenses en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania e Irak, además de Israel. El ataque implica eliminar la respuesta de EE.UU. y el apoyo militar a Israel y con misiles de segunda generación agotar la respuesta israelí. En distintos medios de comunicación internacional trascendió el apoyo chino en inteligencia para la localización de bases militares de EE.UU. y de Israel en Asia Occidental.

Como mencionó Donald Trump, el conflicto se prevé que pueda durar incluso más allá de un mes. Esta ofensiva militar israelí-estadounidense da continuidad a una serie de agresiones militares de casi medio siglo a Irán y tras el asesinato del ayatola Alí Jameneí (previo intento de desestabilización vía revolución de colores), vuelven los ataques preventivos, expresión del unilateralismo agresivo de EU e Israel que, bajo la excusa de un programa militar iraní, ha asesinado a civiles y en esta ocasión a niñas en una escuela.

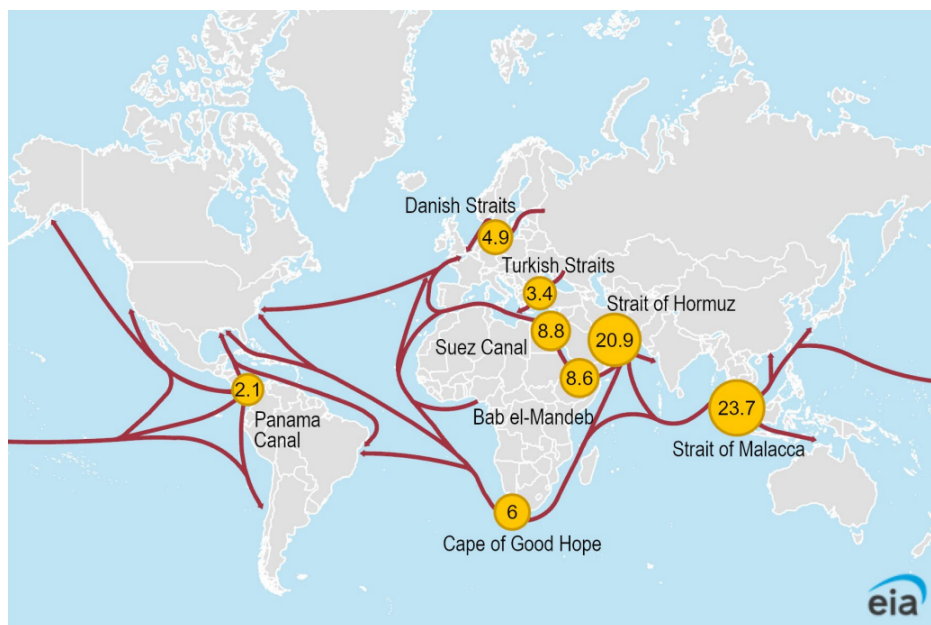
3.-Geopolítica de los estrechos

¹¹ García Fernández, Aníbal (2024), “Estados Unidos y los BRICS en la disputa energética en el siglo XXI”, en López Alejandro, et. al. *El desorden de la economía mundial y sus desafíos para el pensamiento crítico*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 283-306.

Es importante, tras los hechos del 28 de febrero de 2026 y de junio de 2025, considerar la hipótesis de que Estados Unidos pone en jaque a estrechos y pasos interoceánicos como parte de una geopolítica imperial del siglo XXI. En 2022 con la guerra por encargo (guerra proxy) en Ucrania, no sólo se desvinculó energéticamente a Europa de Rusia, sino también se modificaron rutas comerciales que ocupaban los estrechos daneses que dan acceso al Mar Báltico, actualmente en disputa entre la OTAN y Rusia.

Ahora se suma el estrecho de Ormuz que lleva ya un largo historial de tensiones geopolíticas por el control de esta ruta comercial. Cerca de Ormuz está también el Canal de Suez y el paso de Bab-el-Mandeb por donde fluyen mercancías y petróleo como se muestra en el mapa 1.

Mapa 1. Estrechos y pasos interoceánicos con flujo de petróleo en el mundo



FUENTE: Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), 2026

Donald Trump en 2025 mencionó que quería controlar el Canal de Panamá. Detrás de esa declaración se encuentra de nuevo la pugna con China pues una empresa del país asiático posee dos puertos en cada extremo del canal. Trump presionó a Panamá para que no se renovará la concesión de los puertos y cambiaran de dueño para dárselos al complejo financiero BlackRock, uno de los más grandes en el mundo.

Otro estrecho con creciente tensión es el de Malaca con un creciente flujo de petróleo hacia China. Este estrecho se encuentra en lo que Estados Unidos denomina el Indo-Pacífico, zona que según varios documentos estratégicos como la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional 2026, así como las estrategias “Cooperación EE. UU. -Australia” de 2016, “Estrategia Indo-Pacífico” de la administración de Joe Biden y Trump, la formalización del AUKUS con Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos en 2021, dan forma a la creciente disputa por esta zona del mundo. Esa tensión ya se mostró con el intento de ataque de Irán a la base de Diego García controlada por Gran Bretaña y EE.UU.

4.- Geopolítica energética de Estados Unidos

Las estrategias antes mencionadas se suman a otras desde finales del siglo XX que dan forma a una geopolítica energética de EE.UU. para el reposicionamiento hegemónico. Entre esas estrategias destacan: Camino hacia la prosperidad de las Américas; esta estrategia fue emitida por EE.UU. en 2008 en tiempos de Barack Obama; Connecting the Americas 2022: es una estrategia emitida en 2012; Estrategia EE. UU. -Caribe: delineada bajo la administración Trump en 2020; Ley de protección de la seguridad energética de Europa de 2021; Cooperación Atlántica de 2023 para mantener el océano Atlántico abierto y para ello juntaron a 32 países de los continentes americano, europeo y africano.

A estas estrategias se suman la promoción de golpes de estado, apertura de mercados energéticos y sanciones económicas. Por ejemplo: Guerras de colores en el norte de África y Siria con la cual se cambia la correlación de fuerzas internacionales en países que eran productores de petróleo y abastecen en algunos casos a países europeos; apoyar el golpe de Estado en Ucrania de 2014; promover el cambio de régimen en Brasil con la destitución de Dilma Rouseff y con ella el intento de venta de Petrobras y Electrobras; mantenimiento del bloqueo y Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) a Venezuela, país que hasta 2025 contaba con más de mil sanciones económicas; sanciones económicas a Rusia, particularmente a su sector energético; promoción de la Reforma Energética en México entre 2013-2014 que terminó con la desnacionalización de Petróleo Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE); eliminación de subsidio a gasolinas y salida de la OPEP de

Ecuador; golpe de estado en Bolivia en 2019 en el que una de las razones detrás del golpe estuvo la industrialización del litio y la cooperación con China y Rusia.

5.- Venezuela e Irán, parte de un mismo plan. El 3 de enero de 2026 este año convulso comenzó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro de Venezuela y su esposa y congresista Cilia Flores. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, y quizá la cuarta reserva de gas -aunque falta su certificación-. Además, posee coltán, oro, hierro y quizá un conjunto de minerales considerados críticos por Estados Unidos.

China es uno de los principales socios comerciales de Venezuela, en donde ha invertido en infraestructura energética y país que aporta cerca del 3% de las importaciones totales de China. En su discurso del Estado de la Unión de febrero de 2026 Trump mencionó que Venezuela está aportando cerca de 80 millones de barriles diarios a su país. Aunque se eliminaron sanciones económicas a Venezuela y de nuevo volvieron ciertas empresas petroleras, no se animan aún a invertir pues el petróleo venezolano tiene ciertas particularidades geológicas, es extrapesado y requiere aditivos para procesarlo y no todas las refinerías en EE.UU. pueden hacerlo. Y porque aún no termina por convencer a empresarios e inversores el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De esos pocos empresarios que ven posibilidades en Venezuela está Amos Global Energy Management de Ali Moshiri, quien además pretende establecer una nueva relación energética en el Caribe posicionando a Trinidad y Tobago como un hub gasífero, con posibilidades de abastecimiento guyanés y venezolano.

Irán por su parte posee yacimientos mucho más factibles para su extracción y cuenta con infraestructura energética que le permite tener precios que rondan entre 8 y 10 dólares por barril. Sin embargo, siempre ha sido un problema la conflictividad de Asia Occidental. **Como en otros momentos de la historia del siglo XX, EE.UU. vuelve a los pozos latinoamericanos cuando los de Asia Occidental están sometidos a tensiones bélicas o geopolíticas.**

6.- Control financiero del estrecho de Ormuz

Tras varias semanas queda claro el control militar que tiene Irán del estrecho, y se agrega la posibilidad del control financiero, pues el pago del petróleo se hace en dólares

a nivel internacional. Sin embargo, las sanciones coercitivas unilaterales de EE.UU. han obligado a varios países sancionados a buscar alternativas, comerciando en sus propias monedas o en yuanes. Si esta vía financiera cobra fuerza, desde luego que habrá mayores afectaciones financieras internacionales.

7.- Incremento del precio del gas y petróleo.

Los ataques recientes a infraestructura energética, particularmente de gas, han elevado su precio. Qatar, uno de los principales países productores de gas fue atacado en su instalación de Ras Laffan donde produce gas natural licuado y en instalaciones conjuntas operadas por varias empresas, entre ellas Exxon y Shell. Arabia Saudita tuvo ataques en su refinería de Samref. Kuwait informó de ataques en operaciones de gas en Abu Dhabi. Qatar Energy ya reportó que el 17% de su capacidad de exportación está afectada, causando una pérdida de 20 mil millones de dólares. Y también los contratos a largo plazo de Qatar con China, Corea del Sur, Italia (en donde participa también YPF de Argentina con el proyecto Argentina LNG) y Bélgica se han visto afectados.

Por último, Israel bombardeó el mayor yacimiento de gas del mundo en Irán, ubicado en South Pars. Con estos ataques, el precio del gas supera ya los 100 dólares, en Europa subió un 30%, en tanto el crudo Brent se situó en más de 100 dólares (23 de marzo). Un dato no menor de la industria de hidrocarburos no convencionales en EE.UU. es que no son competitivos con precios por encima de los 100 dólares, por lo que, de continuar la guerra, las presiones llegarán al actual mayor productor de petróleo y principal productor de gas internacional.

8.- Alto costo económico de la guerra para EE.UU.

El 19 de marzo, el Pentágono solicitó 200 mil millones de dólares en fondos adicionales para la guerra en Irán. Según informes del Congreso de EE.UU. dados a conocer por The New York Times, en una semana de la guerra el costo fue de 11,300 millones de dólares. En un país con problemas presupuestales severos y una deuda pública que alcanza ya el 101% del PIB y de seguir la tendencia llegará a 120% en 2036, según la Oficina Presupuestaria del Congreso de EE.UU.

Con los elementos antes descritos podemos establecer como hipótesis que Estados Unidos tiene una geopolítica energética de largo plazo en la que intenta, mediante golpes de Estado, sanciones económicas, ataques militares y cambios de

régimen, el control de los yacimientos de petróleo, gas y ahora de minerales críticos.

La estrategia, además, se dirige hacia aquellos países que son socios comerciales estratégicos de China y que se encuentran ya sea en los BRICS+ y/o en la estrategia de la Franja y la Ruta. Esto forma parte del objetivo estratégico de disuasión integrada para debilitar a China, su principal enemigo para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, la respuesta de Irán, con apoyo de algunos aliados, entre ellos China, han demostrado el rezago tecnológico militar de EE.UU., lo costoso de la guerra y el temor de la OTAN y el G7. Todo transcurre mientras el mundo mira por redes sociales y medios de comunicación la destrucción constante del capital, de la fuerza de trabajo y de la naturaleza.

ECUADOR INTERVENIDO: GUARDIÁN DE LOS INTERESES DE EE.UU. CONTRA COLOMBIA

Tamara Lajtman^{12*}, Marcelo A. Maisonnave^{13**} y Aníbal García Fernández^{14***}

El 17 de marzo de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció el hallazgo de una bomba en territorio colombiano, a 200 metros de la frontera con Ecuador en una zona selvática del departamento Putumayo. Solicitó investigar si hubo intencionalidad pues dicho objeto pertenecería al ejército ecuatoriano, lo que tensó aún más la relación entre ambos países.

Se presume que la bomba hallada en territorio colombiano formaba parte de un operativo de bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas el 3 de marzo en Sucumbíos, cerca de la frontera. Este episodio se inscribe en un contexto previo de violencia en la zona, que incluye el hallazgo de 14 cuerpos calcinados en Nariño, también muy cerca de Ecuador, en enero de 2026. Cabe recordar que en Sucumbíos hace 18 años fueron asesinadas 25 personas como parte de la “Operación Fénix” perpetrada por el ejército colombiano en contra de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Finalmente, tras varios días de tensiones, Ecuador y Colombia acordaron conformar una misión técnica binacional para investigar el origen del artefacto explosivo. A través de la mediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se realizarían en la ciudad de Lima reuniones oficiales entre ambos gobiernos los días 25 y 26 de marzo. Mientras tanto, la ex secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem, actualmente enviada especial de Washington para la estrategia Escudo de las Américas, llegó a Quito el miércoles 25 de marzo a fines de avanzar en coordinaciones con el gobierno de Noboa.

Esta nueva situación conflictiva se produce en un momento particularmente sensible: Colombia atraviesa un proceso electoral cuyo resultado puede definir si se

^{12*} Argentina. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de los grupos de trabajo “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” y “Estudios sobre Estados Unidos” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Integrante del Observatorio Lawfare.

^{13**} Argentina. Magíster en Derechos Humanos (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México). Docente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Facultad de Derecho – UNR). Integrante del GT CLACSO “Crítica Jurídica y Conflictos Socio-Políticos”. Integrante del Observatorio Lawfare.

^{14***} México. Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Es investigador del Observatorio Lawfare y docente en la UNAM.

consolida el progresismo con la candidatura de Iván Cepeda o si el país se reconfigura como una pieza más dentro del tablero geopolítico que domina Estados Unidos (EE.UU.). En el ciclo electoral de 2025 en la región, la administración Trump llevó a cabo injerencias electorales en Argentina, Chile y Honduras, como parte de los esfuerzos para “ajustar” a la región a los intereses de seguridad nacional declarados en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025.

Tierra arrasada

Durante el gobierno de Daniel Noboa, se consolida en Ecuador un escenario de “tierra arrasada”, caracterizado por la ausencia de institucionalidad, el deterioro económico, el quiebre del tejido social y el avance del narcotráfico. En este marco, el país experimenta una profundización sin precedentes de la militarización de la seguridad pública e interna, bajo el argumento del combate al narcotráfico y al “terrorismo”, en línea con el guion de la política de seguridad estadounidense. Esto ocurre en un escenario donde diversas investigaciones han documentado vínculos entre circuitos de narcotráfico y empresas del sector bananero asociadas a la familia Noboa.

La ola de violencia en Ecuador ha crecido a un ritmo vertiginoso, con 9,000 homicidios intencionales en 2025 y alcanzando una tasa de aproximadamente 50,91 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, en un país que hasta 2017 era de los más pacíficos y seguros del continente. Actualmente, hay más de 75.000 soldados y policías desplegados en el territorio. Sin embargo, la experiencia reciente en la región sugiere que este tipo de respuestas no reduce la violencia, sino que tiende a profundizarla, favoreciendo la fragmentación de actores armados y el fortalecimiento de estructuras paramilitares.

Mientras tanto, el lawfare y la destrucción de la democracia continúan avanzando en paralelo a la militarización. Desde 2017, con la asunción de Lenín Moreno, el uso del aparato judicial como herramienta de persecución política se ha consolidado en Ecuador hasta erosionar gravemente el Estado de derecho, con el objetivo de desarticular al correísmo como sujeto político. Las instituciones administrativas y judiciales han sido progresivamente puestas al servicio de esta dinámica, orientada especialmente contra dirigentes de la Revolución Ciudadana.

Entre los episodios más recientes destaca la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez —uno de los principales opositores de Noboa— el 10 de febrero de

2026, en el marco de una causa por presunta delincuencia organizada en torno a la comercialización de combustibles mediante las empresas de su familia. Actualmente, Álvarez está en una prisión de máxima seguridad (donde están detenidos líderes de grandes bandas criminales) y cuenta con tres causas por las que tiene prisión preventiva. Pocas semanas antes, en enero, la Fiscalía allanó la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González en el contexto del caso “Caja Chica”, por presunto lavado de activos y financiamiento desde Venezuela, una acusación que el propio gobierno vinculó a información de inteligencia de Estados Unidos que nunca fue hecha pública.

El 9 de marzo de 2026, relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre el desmoronamiento del Estado de derecho en Ecuador y el avance de un proyecto de rasgos autoritarios. Uno de los puntos centrales señalados fue el uso indebido del concepto de “terrorismo”, utilizado por el gobierno para calificar automáticamente conductas vinculadas al crimen organizado sin cumplir con los estándares internacionales.

Fuerzas de seguridad de EE.UU. en Ecuador con Noboa: recuento mínimo

La presencia militar de EE.UU. en Ecuador se ha intensificado de manera acelerada durante el gobierno de Noboa, incluso en un contexto en el que el referéndum de noviembre de 2025 impidió formalmente el establecimiento de bases militares extranjeras.

- 17 de marzo de 2026: el informe anual del Comando Sur presentado ante la Cámara de Representantes reveló que Estados Unidos brindó “soporte fundamental de inteligencia” para la localización y captura de “Fito”, líder de Los Choneros, detenido el 25 de junio de 2025 y posteriormente extraditado a EE.UU.
- 11 de marzo de 2026: se anunció un memorándum de entendimiento entre EE.UU. y Ecuador que habilita la presencia permanente de agentes del FBI en territorio ecuatoriano.
- 6 de marzo de 2026: Operación del Ejército ecuatoriano con apoyo del Comando Sur, destruyó un campamento en Sucumbíos, en la frontera con Colombia. Según información oficial, se trataba de una base de los “Comandos de la Frontera”, disidencia de las FARC. El comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, calificó la operación como un éxito en el marco del combate al narcoterrorismo.

Sin embargo, según un reportaje de The New York Times, habitantes de la zona afirman que el lugar atacado era en realidad una granja lechera.

- 3 de marzo de 2026: el Comando Sur anunció que fuerzas militares estadounidenses estaban asistiendo a Ecuador en “operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas”. Autoridades ecuatorianas confirmaron la presencia de tropas estadounidenses en una base de la Fuerza Aérea en Manta.

En una investigación académica reciente (*Lawfare y geopolítica: la incidencia de Estados Unidos sobre el aparato judicial y las fuerzas de seguridad en Ecuador (2017-2024)*) demostramos cómo, desde los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, el estrechamiento de vínculos con el aparato de seguridad estadounidense ha convertido a Ecuador en una base de operaciones de Washington en la región. Esta dinámica se materializa en acuerdos como el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que otorga inmunidades al personal militar estadounidense y habilita su actuación en territorio ecuatoriano —en línea con instrumentos similares vigentes en países como Panamá (desde 2022) y, más recientemente, Paraguay—, así como en el Acuerdo Relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales (SHIPRIDER). Ambos fueron firmados durante el gobierno de Lasso y ratificados por Noboa en febrero de 2025.

En lo que concierne a las Islas Galápagos, en diciembre de 2024, el gobierno de Ecuador aprobó la resolución del “Proyecto Integral de Seguridad en la Región Insular” y su instructivo de implementación (activando instrumentos del SOFA y SHIPRIDER) para habilitar el acceso militar estadounidense en el archipiélago para operaciones contra “actividades marítimas transnacionales ilícitas”. A esto se suma un incremento exponencial de la asistencia en seguridad, la profundización de acuerdos con agencias como la DEA, INL, FBI y la incorporación de actores privados vinculados al complejo militar estadounidense, incluyendo empresas asociadas a Erik Prince/Blackwater.

En este escenario de creciente militarización y profundización de la cooperación con EE.UU., incluso análisis provenientes del propio campo de la seguridad estadounidense reconocen las implicaciones de este tipo de intervenciones, anticipando tanto sus “potenciales beneficios” como riesgos de inestabilidad política y social.

Informe de la consultora de seguridad Stratfor (9 de marzo 2026):

“Dada la extrema inseguridad en Ecuador, es probable que la mayor parte de la población acepte la ayuda de Estados Unidos, sobre todo a corto plazo. Y aunque el Movimiento de la Revolución Ciudadana, en oposición, probablemente continúe criticando esta cooperación por motivos de soberanía, Noboa y sus aliados controlan la Asamblea Nacional, por lo que habrá pocas limitaciones políticas a las operaciones a corto plazo. Además, la asistencia de seguridad estadounidense podría, en última instancia, reducir la violencia y hacer que Ecuador sea más atractivo para la inversión y las operaciones comerciales, aunque solo después de al menos un año de presión sostenida sobre las pandillas, lo cual no está garantizado. Mientras tanto, las operaciones aumentarán gradualmente el potencial de reacción adversa, especialmente si surgen informes de operaciones estadounidenses que provoquen muertes de civiles o si las operaciones no logran una reducción sustancial y sostenible de la violencia. La oposición popular sería más probable si las operaciones desestabilizan el entorno criminal de manera que se incremente la competencia entre grupos criminales rivales o la violencia de represalia contra las autoridades y la población civil”.

Ecuador: nuevo guardián de los intereses de EE.UU. en la región

Aunque los hechos recientes en Venezuela muestran que las acciones militares directas no están descartadas, el caso ecuatoriano permite observar la consolidación de un esquema de tercerización de la desestabilización, en la cual EE.UU. delega funciones en actores estatales locales que adoptan sus marcos doctrinarios, prioridades de seguridad y lógicas de intervención, consistente con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. En este esquema, Ecuador no sólo internaliza esta agenda, sino que comienza a proyectarla hacia el entorno regional, rol que fue claramente asumido por Colombia a partir del Plan Colombia, pero que se ha diluido con el plan Paz Colombia y en el marco del gobierno de Petro.

Incluso desde la propia doctrina militar estadounidense se conceptualiza a Ecuador como una plataforma de proyección regional. Un análisis publicado en *Military Review* señala que una eventual base o presencia militar en el país permitiría fortalecer las capacidades de vigilancia, inteligencia y monitoreo sobre dinámicas que afectan a toda la región, desde el narcotráfico hasta la competencia geopolítica con potencias como China y Rusia. En este esquema, Ecuador no es pensado únicamente como un receptor de asistencia, sino como un punto de apoyo geopolítico, logístico y de inteligencia para operaciones de alcance regional.

Cuando este enfoque se articula con la dinámica operativa identificada por informes como el de Stratfor (4 de marzo) —donde EE.UU. provee inteligencia, planificación y apoyo logístico mientras las fuerzas ecuatorianas ejecutan las operaciones— se configura un patrón más amplio. Estados Unidos conserva el control estratégico, mientras delega la ejecución en actores locales. De este modo, la presencia no requiere necesariamente una base formal ni una intervención directa: opera a través de redes de “cooperación” sin asumir los costos políticos, jurídicos y militares. En este marco, incluso en escenarios de involucramiento directo de personal estadounidense —por ejemplo, en casos que deriven en la muerte de civiles—, mecanismos como el SOFA garantizan su inmunidad.

A la vez, se agrava la disputa arancelaria y comercial entre Ecuador y Colombia, iniciada en enero pasado por medidas tomadas por el presidente Noboa y replicadas por Petro, que pueden tener impacto por cientos de millones de dólares y cientos de miles de empleos en ambos países. En este contexto debe entenderse la firma del nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y Ecuador, que facilitará el ingreso al mercado ecuatoriano de productos y de empresas estadounidenses, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía, telecomunicaciones, agricultura y farmacia. Esta nueva etapa implica un mayor control de EE.UU. sobre la economía ecuatoriana, en un plan similar a los implementados con Argentina, El Salvador y Guatemala.

Asimismo, en días recientes la prensa estadounidense difundió investigaciones en fiscalías de Manhattan y Brooklyn, aún no precisadas, que incluyen el análisis de supuestos vínculos entre el presidente Gustavo Petro y organizaciones narcocriminales. Las investigaciones son impulsadas también por la DEA y la Agencia de Investigaciones en Seguridad Nacional estadounidense y se encontraban en etapas preliminares.

Riesgos de escalamiento y urgencia de vigilancia internacional

En el actual contexto preelectoral en Colombia, estos procesos adquieren una dimensión regional crítica en el que se perdieron instancias regionales como la UNASUR. La posibilidad de que acciones militares ecuatorianas impactan en territorio colombiano eleva el riesgo de violaciones al derecho internacional, de intervencionismo extranjero y de escalamiento de tensiones. Los antecedentes no son

menores: el bombardeo de Sucumbíos en 2008 mostró cómo la intervención transfronteriza puede desestabilizar la región.

A esto se suma una política exterior ecuatoriana totalmente alineada con EE.UU., que incluye el respaldo a intervenciones militares en Venezuela, acusaciones sin sustento sobre la presencia en la región de actores como Irán o Hezbollah, y la ruptura de relaciones con países como Cuba y México —en este último caso, tras el asalto a su embajada en Quito en 2024 y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas.

En este contexto, la tercerización de la desestabilización deja de ser una hipótesis para convertirse en una dinámica observable: Ecuador no solo reorganiza su política interna bajo lógicas de militarización, extranjerización y persecución judicial, sino que comienza a proyectar estas dinámicas hacia el plano regional, con impactos directos sobre procesos políticos-electorales estratégicos como el colombiano, siendo la punta de lanza de una nueva estrategia militar estadounidense de tutelaje, como quedó evidente con la Iniciativa Escudo de las Américas.

EL ASEDIO IMPERIALISTA SOBRE CUBA

Lucas Castiglioni^{15*}

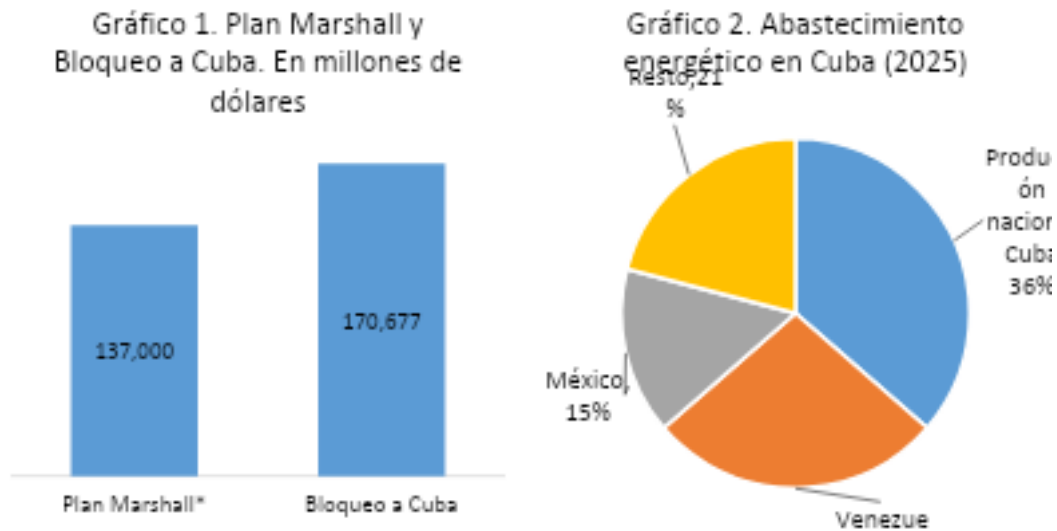
La revolución cubana debió afrontar durante más de sesenta años un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. **Según los datos presentados por Cuba en la Asamblea de Naciones Unidas en 2025, hasta el año pasado el bloqueo significó una pérdida de más de 170.677 millones de dólares. Esta cifra resulta un 25% superior a todo el desembolso que hicieron los Estados Unidos a 17 países luego de la segunda guerra mundial bajo el Plan Marshall (gráfico 1).**

El bloqueo comercial, monetario y financiero se fue agravando a lo largo del tiempo. Durante la segunda presidencia de Donald Trump se acrecentó el ahogo al pueblo cubano con la incorporación del bloqueo energético. Según los datos de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), la producción nacional solamente logra cubrir el 36% del consumo energético del país, lo que hace necesaria la importación de combustible (gráfico 2). **La invasión a Venezuela en enero de este año y la presión sobre otros proveedores energéticos como México fuerzan la crisis energética en Cuba y tensionan aún más las condiciones de vida de sus habitantes.**

El repudio al bloqueo imperialista se viene registrando año a año en 33 resoluciones consecutivas de la Asamblea de Naciones Unidas. En la última votación, solamente 7 países rechazaron la resolución y 12 delegaciones se abstuvieron (gráfico 3). En este listado se destacan los casos latinoamericanos de Argentina y Paraguay, apoyando el bloqueo, y Costa Rica y Ecuador, absteniéndose.

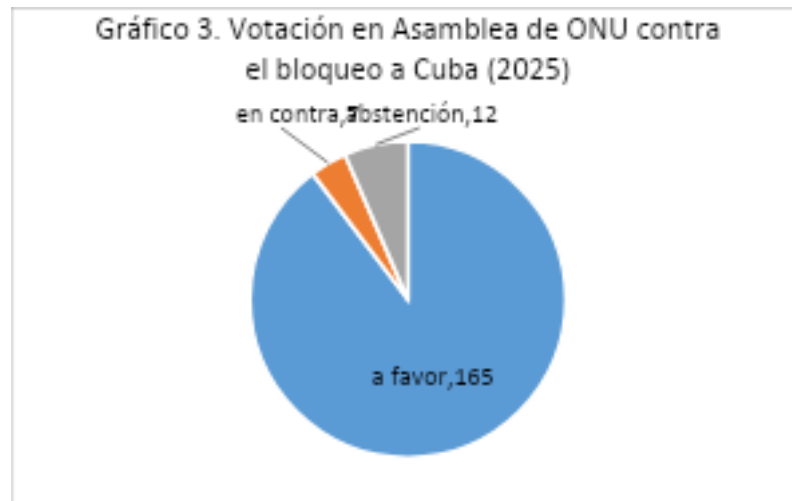
Al rechazo al bloqueo se deben incorporar las campañas internacionales de solidaridad con el pueblo cubano que, en el contexto de agudización de la ofensiva imperialista, resultan de suma urgencia.

^{15*} Argentina. Integrante de CLACSO GT Crisis y economía mundial. Miembro de FISyP.



* Datos proyectados en función 13.000 millones de dólares de 1948

Fuente: Elaborado en base a datos de ONU, UNE y estimaciones.



Fuente: Elaborado en base a datos de ONU